

EL PARTIDO DE ESTADO POSTMODERNO

La distribución mexicana a la teoría política ha sido muy pobre. Nuestros grandes términos y principales políticos formales -democracia, federalismo, liberalismo, presidencialismo, etcétera- vienen todos de fuera. Y lo mismo sucede con la mayoría de los términos que rigen nuestra vida política real (muy distinta de la legal): caudillismo, caciquismo, autoritarismo, patrimonialismo o clientelismo. En realidad, la aportación de México a la teoría de la política es de pie de página y no es para enorgullecerse: mordida, tapado o dedazo, son ejemplos copiscuos de términos mexicanos incorporados al diccionario universal de lo político. Sin embargo, en tiempos recientes han surgido aquí dos innovaciones prácticas que bien pueden conducir a consideraciones teóricas que rebasen nuestras fronteras: la guerrilla y el partido de Estado postmoderno.

En efecto, fue aquí y ahora donde nació como práctica y concepto la guerrilla postmoderna, la chiapaneca. Una guerrilla indígena pero no racista ni xenófoba, radical, pero dúctil y libre de las ideologías de la guerra fría: una guerrilla que no busca tomar el poder sino contribuir a modificarlo, que celebra una convención nacional a plena luz y que igualmente participa en elecciones nacionales, que se subordina a organizaciones pacíficas de la sociedad civil, y que, finalmente, pide que se le haga obsoleta por medio de la acción política no violenta.

Pues bien, a esa innovación hay que añadir otra: el partido de Estado postmoderno, que nació el 21 de agosto.

Ese 21 de agosto, tras elecciones con alta participación y relativamente vigiladas por propios y extraños, el PRI volvió a ganar la Presidencia y la mayoría en el Congreso. De esta manera, el partido de Estado que nació en 1929 como respuesta a una emergencia dentro de un cerrado círculo gobernante que aún olía a pólvora -el asesinato del presidente electo y último gran caudillo de la Revolución Mexicana, el general Alvaro Obregón-, ganó su décima segunda victoria presidencial consecutiva y se aprestaba a seguir gobernando por lo menos hasta el año 2000, para mejorar lo que ya es un récord mundial en materia de control político de un partido sobre una sociedad en este siglo. Pero como la élite revolucionaria que dio formas al PNR-PMR-PRI, asumió el poder desde principios de 1917, resulta que cuando concluya el período presidencial de Ernesto Zedillo, la transmisión ininterrumpida del poder dentro de un mismo círculo, habrá cumplido ¡83 años!

Lo realmente extraordinario del fenómeno anterior, lo que hoy le da su carácter postmoderno, es que la nueva etapa de ese prolongado monopolio del poder, se da en una forma y medio completamente distintos a los originales. Cuando nació el PRI, la democracia estaba de capa caída, pero hoy se ha recuperado y está en ascenso. Y es justamente este cambio en la naturaleza del entorno político internacional y de la propia sociedad mexicana, lo que ha obligado a quienes controlan al PRI a

ejercer su poder de manera nueva, difícilmente imaginada por su creador, el general Plutarco Elías Calles, y menos por esos líderes europeos que inventaron los partidos de Estado. En efecto, los creadores de los sistemas autoritarios y totalitarios que surgieron en la primera mitad del siglo que está a punto de concluir, exigieron y obtuvieron la subordinación plena de sus respectivas sociedades.

Es claro que Lenin, Mussolini, Hitler, Calles, Franco o Mao, no hubieran imaginado que el poder adquirido por la fuerza y que sirvió para dar forma y sostener a sus respectivos partidos de Estado, podría sostenerse en condiciones completamente diferentes, como las que hoy imperan en México: con partidos de oposición golpeados pero que sobreviven, elecciones competidas y relativamente vigiladas, y, lo que es aún más notable, con resultados electorales muy lejos del proverbial 99 por ciento soviético o, incluso, del 92 por ciento de José López Portillo; es más, el partido de Estado postmoderno ya ni siquiera reclama el dudoso 50 por ciento más algo, al estilo Carlos Salinas, sino que se debe conformar con apenas el 48.7 por ciento del total!

Ahora bien, que pese al 48.7 por ciento de votos el PRI sigue siendo partido de Estado, es algo indiscutible, que salta a la vista. Para empezar, ahí están los recursos. La semana pasada, el PRD declaró haber gastado en toda su campaña presidencial apenas 12 millones de nuevos pesos. El contraste con el PRI, es extraordinario. De acuerdo con un cálculo de

Adip Sabag, basado en un monitoreo directo del Instituto Mexicano de Opinión Pública, el costo total de la campaña presidencial del PRI fue de mil 250 millones de dólares, es decir, y de acuerdo con el tipo de cambio actual, 4 mil 250 millones de nuevos pesos (el tope legal son 922 millones). De esta gigantesca suma, la mayor parte -3 mil 230 millones de nuevos pesos- fue aportada por el sector privado nacional y extranjero (¿los invitados a la cena de 25 millones de dólares *per capita* en febrero de 1993?), y sólo mil 20 millones de nuevos pesos tuvieron su origen en el Estado (*El Financiero*, 24 de agosto). Con base en estos datos, cada voto por el PRD significó un gasto de dos pesos con tres centavos, pero cada voto por el PRI costó 245 pesos con veinte centavos. Si bien la fuerza electoral del PRI es tres veces superior a la del PRD, su fuerza económica lo es en 121 veces. Esa enorme diferencia es la propia entre un partido normal y uno de Estado.

La estratosférica disparidad en recursos entre el partido de Estado y la oposición, puede explicar la enorme diferencia entre esos partidos, pero sólo la naturaleza del PRI como partido de Estado explica la parcialidad de esos medios. Y para ilustrar el punto, está el caso de Enrique Quintana. Hasta fines de agosto y por dos años y medio, Quintana fue el conductor del programa cotidiano de noticias *Enfoque*, informativo, ágil e imparcial que sale del aire de 6 a 9 de la mañana por Estéreo Cien. Pues bien, el dueño de la radiodifusora -Edilberto Huesca- se disgustó con el conductor

porque éste había dado espacio a llamadas telefónicas del auditorio donde se expresaban críticas al proceso electoral del 21 de agosto y, además había entrevistado a Eduardo Valle, ex funcionario de la Procuraduría General de la República, cuyas declaraciones han conectado al secretario de Comunicaciones y Transportes con el narcotráfico. El disgusto de Huesca con las libertades que se tomó Enrique Quintana -enteramente normales en un país democrático pero contrarias a las directivas políticas autoritarias que dio el 22 de agosto la Cámara Nacional de la Industria y la Televisión (*La Jornada*, 27 de agosto)- tenían una poderosa razón: el temor a que la Secretaría de Comunicaciones le revocara la concesión radiofónica. En un Estado de derecho, la SCT no podría actuar de manera arbitraria contra un radiodifusor, pero en un sistema de partido de Estado sí.

El de Enrique Quintana no es un caso aislado. Semanas antes, Rubén González Luengas, otro conductor de noticieros radiofónicos, fue alentado a renunciar. Lo mismo le había sucedido antes y en la misma estación -Radio Mil- a Miguel Angel Granados Chapa, que debió renunciar en octubre de 1993 por haber contravenido los deseos de la Secretaría de Gobernación de Patrocinio González Garrido. Y antes está el caso de José Cárdenas, y antes... etcétera.

Es claro que una buena parte de los 17 millones 336 mexicanos que votaron por el PRI el 21 de agosto -probablemente la mayoría-, lo hicieron porque así lo quisieron. Votaron libre

y conscientemente por seis años más del largo dominio prista, pues las opciones que les ofrecía la oposición -la derecha moderna del PAN y la izquierda moderada del PRD- no les convencieron. Pero también hubo otros que votaron presionados por medios con los que sólo cuenta un partido de Estado. Y aquí consigno cuatro ejemplos que recabé directamente. Un barrendero informó al dueño de la casa de clase media donde diariamente recoge la basura: "A donde vivo, señor, fue un camión de la Compañía de Luz, y dijeron que si perdía el PRI, quitarían los *diablitos* de los que se cuelgan los alambres de la compañía y los dejarían sin luz". Una sirvienta le dijo a una colega "Señora, ¿es cierto que se tiene que ir a votar por el PRI?", al recibir una respuesta negativa, explicó: "Donde vivo, dijeron que si no se vota por el PRI, no van a dar permiso de enterrar a los muertos... y mi mamá está muy pero muy mala". En otra situación muy similar, la persona afirmó que en el Seguro Social le tomaron el número de su credencial de elector y le informaron: "Al que no vote por el PRI, se le suspenderá el servicio". Aquí en mi barrio, un plomero y electricista, en cuya casa se instaló la casilla en que voté, me dijo: "La gente votó con miedo, pues dijeron que si perdía el PRI, habría guerra... revolución". Se puede decir que los temores aquí registrados son absurdos, incluso ilógicos, pero a muchos de los nacidos y desarrollados en la larga era del PRI, son tan reales como al que el día le siga la noche.

Y finalmente, está el fraude. Seguramente, esta vez no hubo el fraude masivo de otras veces. Sin embargo, fraude hubo,. Ahí están, por ejemplo, las 29 casillas de Monterrey - urbe donde el PRI y PAN llegaron nariz con nariz a la recta final- donde al fin de la jornada el número de votos superó al número de personas que aparecen en la lista nominal; en algunos casos esa diferencia es de más del 80 por ciento. Los datos del PAN, muestran que en el 2.5 por ciento de todas las casillas del país, votaron entre el 90 por ciento y más del 100 por ciento de los ciudadanos en lista (*Reforma*, 26 y 28 de agosto). Están también los videos de San Miguel Progreso, en Guerrero, y en Santo Domingo, Oaxaca, donde se muestra cómo los votantes, campesinos, son inducidos -incluso la imagen capta cuando un funcionario de casilla toma la mano del elector y cruza el logotipo de PRI- a sufragar en favor del partido oficial (*Proceso*, 29 de agosto). Están las irregularidades reportadas por Alianza Cívica en general o las muy específicas de Chalco (incidentes en el 90 por ciento de las casillas observadas) (*El Financiero*, 27 de agosto). En fin, en 1994 el fraude no parece haber tenido ya el papel central que tuvo en 1988 o en las elecciones anteriores, pero sigue como parte destacada del arsenal del partido de Estado.

Para concluir, el sistema de partido de Estado postmoderno es ese que niega su propia existencia y que posee una ideología tan dúctil que le permite decirse parte de la "tercera ola democrática" de fin de siglo; que tolera a los partidos

opositores que intentó destruir pero que ya no pudo; que acepta contar con menos del 50 por ciento del voto pero que sigue controlando a los poderes Legislativo y Judicial; que saca del sector privado y no del público el grueso de sus fondos, pero que mantiene cuenta abierta en secretarías de Estado y empresas públicas; en fin, es un partido al que ya no le es indispensable el fraude, pero que lo sigue practicando y lo mantiene como "fondo de contingencia".

Entre el partido de Estado original y el postmoderno y hay una diferencia que no debe desdeñarse; por el espacio que separa a ambos se puede colar en el futuro la democracia, pero esa es sólo una posibilidad, no una seguridad.